



drynet

www.dry-net.org

No. 9

Diciembre 2011

Noticias de Drynet

Impulsar la recuperación de las tierras áridas

Drynet es un proyecto de 14 organizaciones de todo el mundo que trabajan juntas para combatir la degradación de la tierra

Drynet al día

CONTENIDO

La realidad de las plantaciones forestales 1-2

Minería al límite: Análisis de tres casos de minería de frontera en América Latina 3

Encuentro inter regional: "Se llevan nuestros bienes, dejándonos sus males" 4-5

Gobierno tuvo que entregar ubicación de cultivos transgénicos de Monsanto 6

Sancionan proceder anti ético de transnacionales mineras y autoridades 7

ONG debaten sobre Rio+20 8

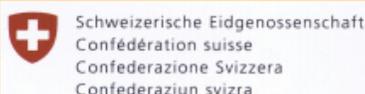
COP 10 de la UNCCD 8

Publicado por
OLCA

www.olca.cl



El proyecto Drynet es financiado por la Confederación Suiza



La realidad de las plantaciones forestales:

Destrucción de ecosistemas, degradación de tierras, sequía, emigración, pobreza...

En Chile, el modelo de desarrollo forestal impuesto en la dictadura militar se basa en la instalación sistemática de monocultivos a gran escala de especies exóticas, para abastecer plantas de celulosa y aserraderos con fines de exportación. Estos monocultivos cubren hoy una superficie cercana a los 3 millones de hectáreas, y más del 90% corresponde a especies de pino o eucalipto.

Este avance de los monocultivos se realiza en base al engaño promovido por grandes empresas en alianza con el gobierno (nacional y locales), que hacen falsas promesas a las comunidades y pequeños propietarios de tierras sobre la generación de empleo y desarrollo local. En otros casos, se convence a pequeños propietarios para que instalen monocultivos en sus propias tierras, dejándolos así atados a las grandes empresas, o promueven su plantación como una forma de "recuperación de tierras degradadas", cuando en realidad tales tierras podrían ser de enorme utilidad para las poblaciones locales.

Estas falsas promesas se realizan de manera deliberada, ocultando la abundante evidencia documentada de los gravísimos impactos ambientales, sociales y económicos que sufren las poblaciones locales debido a los monocultivos. Hoy día, en las regiones y comunas con mayor desarrollo forestal (Maule, Bío Bío y Araucanía) encontramos los mayores índices de pobreza (según MIDEPLAN) y los peores índices de Desarrollo Humano (según el PNUD).

Los monocultivos forestales de gran escala:

- Destruyen los ecosistemas naturales y los bienes que de allí se obtienen (leña, medicinas, alimento, etc.), afectando la agricultura de subsistencia y atentando contra la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.

- Generan desempleo y provocan el

despoblamiento rural, dañando las economías locales, extirpándoles su cultura y deteriorando la calidad de vida de las comunidades locales.

- Agotan los recursos hídricos, afectando la disponibilidad de agua para las comunidades humanas y ecosistemas.
- Contaminan el agua por el uso indiscriminado de plaguicidas altamente peligrosos.
- Empobrecen los suelos al utilizar el método de cosecha a tala rasa, dejándolos desnudos de vegetación y sujetos a erosión.
- Violan los derechos de los pueblos originarios y destruyen la cultura campesina.
- Destruyen la biodiversidad y deterioran el paisaje natural.

Por ello, rechazamos los intentos de las compañías CMPC y ARAUCO para ser certificadas por el sistema FSC y cuestionamos que este sistema de certificación no integre elementos claves, como es la consulta a los pueblos originarios, la relación de las empresas forestales con la contaminación costera a través de la industria de celulosa y la superficie máxima de cosecha de monocultivos a tala rasa.

Queremos bosques de verdad, y trabajar por ello implica, como sujetos sociales y comunidades, participar activamente para forjar un modelo alternativo de producción, comercio y consumo basados en la justicia, la solidaridad y los saberes de nuestros pueblos.

Por lo tanto exigimos a nuestro Estado:

- Detener la expansión de los monocultivos forestales en el centro sur de Chile.
- Rechazar cualquier nuevo subsidio o incentivo

estatal para proyectos que destruyen el bosque nativo, sustituyen suelos agrícolas, agotan las fuentes de agua y degradan los suelos.

- Realizar estudios públicos sobre los impactos de las plantaciones y la industria forestal (plantas de celulosa y aserraderos).
- Poner fin al subsidio de los monocultivos de árboles (D.L. 701 de 1974) y generar un nuevo cuerpo legal que se enfoque en programas de recuperación real de suelos degradados, dirigido exclusivamente a pequeños y medianos propietarios de tierras, que fomente las economías locales y garantice la soberanía alimentaria

Llamamos a todas y todos a desenmascarar las falsas campañas y resistir el avance de los monocultivos forestales, que no hacen más que favorecer a los grandes capitales económicos.

Los monocultivos forestales no son bosques. Las funciones sociales, ambientales, económicas y culturales que nos entrega el bosque nativo, difieren enormemente de los monocultivos de árboles: árboles de una sola especie, alterada genéticamente y de rápido crecimiento, plantados en bloques homogéneos de la misma edad, donde se impide el desarrollo de la flora y fauna local, generando dramática pérdida de biodiversidad.

En los bosques naturales todo vive. Un bosque contiene numerosas especies de árboles y arbustos de todas las edades y una cantidad aun mayor de otras especies vegetales, tanto en el suelo como sobre los propios árboles y arbustos (helechos, musgos, líquenes, hongos, trepadores, epífitas, etc.). Una enorme variedad de especies de micro y macro fauna (sobre y bajo el suelo) encuentran en el bosque abrigo, alimentos y posibilidades de reproducción. Las interacciones de todos estos elementos generan bienes (madera, alimento, medicinas) y servicios (agua, protección de suelos, paisaje, espiritualidad, recreación). Las comunidades humanas forman parte de los bosques, ya que muchos pueblos los habitan, interactúan con ellos y obtienen los bienes y servicios que aseguran su supervivencia.

Las comunidades humanas no habitan los monocultivos forestales y, normalmente, no tienen acceso a ellos. En general las plantaciones son precedidas por la expulsión de la población local y por la destrucción del bosque del que dependían. En el mejor de los casos, las comunidades



locales pasan a constituir mano de obra barata y esporádica, para la plantación y cosecha de los árboles que se realizará años más tarde.

¿Quiénes controlan el sector forestal en Chile?

El Modelo Forestal en Chile está controlado principalmente por dos grupos económicos, CMPC (de la familia Matte) y ARAUCO (de la familia Angelini). Entre ambas poseen un 70% aproximado del total de suelo utilizado para plantaciones en Chile y se están expandiendo a diferentes países de la región, como Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina y Brasil. Estos grupos económicos lograron un verdadero "imperio" ayudados por la dictadura militar, recibiendo tierras gratuitas, millonarios subsidios para plantar y empresas estatales a bajo precio, en un proceso fraudulento de privatizaciones. Pese a los cambios político-administrativos que ha vivido Chile en los últimos años, hoy los subsidios continúan.

Estos grupos controlan todo el circuito forestal exportador, el segundo en importancia después de la minería.

Algunas estrategias de validación de estas compañías:

- Financian campañas a políticos de todos los partidos;
- utilizan la Responsabilidad Social Empresarial para lavar su imagen e imponer la dependencia comunitaria (salud, educación, cultura, transporte, obras públicas) a actividades contaminantes;
- realizan influencia personal o lobby sobre los actores políticos;
- crean y manipulan instancias gremiales (CORMA) para satisfacer sus demandas;

e. implementan campañas comunicacionales engañosas (Bosques para Chile), financian investigación e infraestructura universitaria y contratan figuras públicas para validar su discurso.

Numerosos estudios muestran que las comunas ocupadas por monocultivos forestales (Maule, Bío Bío y La Araucanía) registran una disminución en la disponibilidad de agua y los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza del país.

Además de consumir el agua y los nutrientes del territorio, el proceso industrial de las plantaciones y de producción de celulosa contamina seriamente el suelo, el agua y el aire, por el uso y generación intensiva de elementos tóxicos, siendo los únicos beneficiados de estos procesos destructivos los grupos económicos que lucran con el saqueo de los recursos naturales y las malas prácticas forestales e industriales.

Este modelo ya consolidado se está expandiendo aún más de la mano de las falsas soluciones al Cambio Climático, tales como los agrocombustibles y los mal llamados sumideros de carbono, que son nuevas fuentes de negocios para las empresas transnacionales y no aportan a solucionar el problema.

Colectivo VientoSur • Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA • CCAA Ingeniería Forestal, Universidad de Chile • Radio del Mar • Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, AIFBN • Marcha Mundial de las Mujeres, Chile • ECOCEANOS • Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile • Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, RAP-AL • Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI • AMAPACH

Publicaciones OLCA:

"Minería al Límite: Análisis de tres casos de minería de frontera en América Latina"

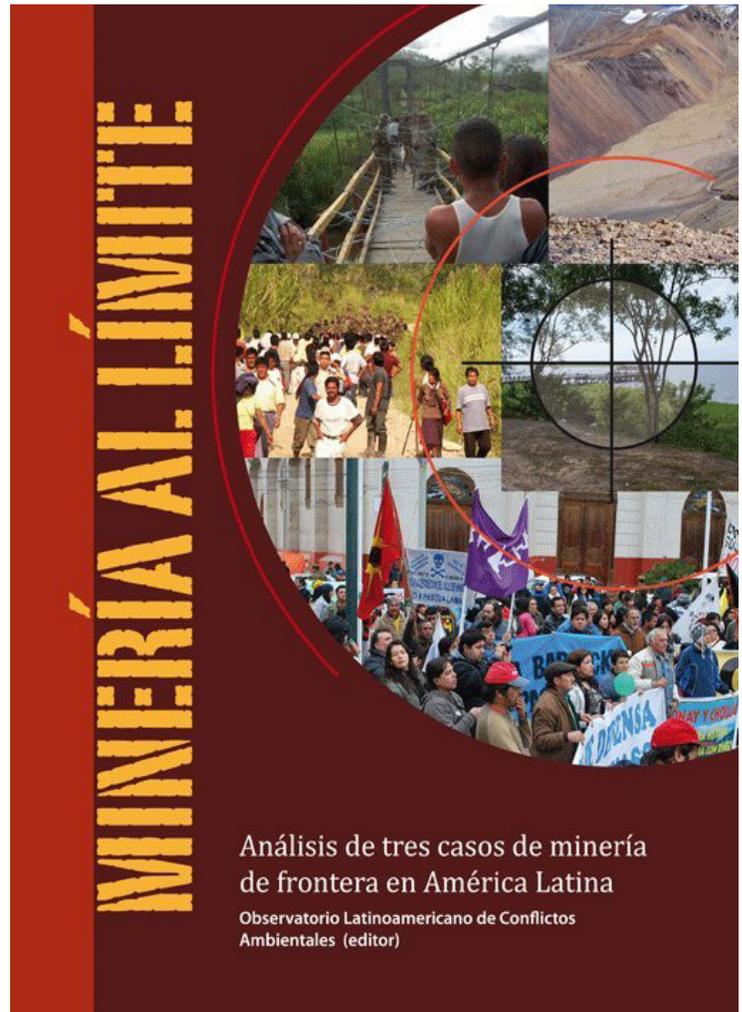
Este trabajo se propone dar cuenta de lo que significa la minería de frontera desde el punto de vista de las comunidades que han sido amenazadas por ella. Analiza tres casos específicos: Chile/Argentina (caso Pascua Lama), la frontera Ecuador/Perú (caso Ecuacorrientes y Majaz) y la frontera Brasil/Bolivia (caso Polo Siderúrgico en El Motún). Los casos fueron desarrollados por organizaciones que acompañan a comunidades afectadas por este fenómeno, intentando articular una matriz común de análisis.

Quizás lo más interesante de este esfuerzo es que muestra la minería de frontera como un concepto en gestación: las comunidades denuncian su impacto, identifican que no favorece a los Estados y que obedece al interés de las empresas, asumen que para resistir a ella se requiere de la concurrencia de las comunidades de los dos países, entienden que reviste un potencial foco de guerras entre vecinos, dimensionan que se está amenazando ecosistemas altamente frágiles que cumplen el rol de reservas bióticas estratégicas en un planeta que se consume.

La minería de frontera se ve como un fenómeno nuevo impulsado por las transnacionales en su búsqueda de sobreganancias y cuyas operaciones requieren recursos naturales o logísticos del país vecino, con lo que el impacto social y ambiental alcanza a las dos naciones.

Este tipo de minería requiere instrumentos que abran las fronteras a las empresas, lo que se ha hecho posible por la sucesiva firma de acuerdos y tratados, que no tuvieron participación ciudadana, y que son vinculantes en el ámbito del derecho internacional, sometiendo a los Estados a desventajosos escenarios.

De hecho las ventajas que los tratados mineros han logrado en su sector resultan discriminatorias (por excesivas) con respecto a cualquier otro sector de la economía. Para hacerse una idea, algunos de estos beneficios son la concesión de la zona de frontera (en Chile por ejemplo alcanza al 25% del territorio nacional) a empresas con el mayor prontuario de contaminación y devastación ambiental del mundo. Coincide que los terrenos cedidos, por ser desde siglos intocables, constituyen reservas invaluables de biodiversidad, son altamente sensibles a la intervención humana, poseen recursos hídricos vitales para los países y el planeta, y son



habitados por poblaciones indígenas (marginadas al interior de los países) que sostienen culturalmente otros modelos de desarrollo y de protección de los bienes comunes.

Además, los tratados mineros garantizan a las empresas que tendrán a disposición todo lo necesario para llevar a cabo sus emprendimientos privados, de rentabilidad privada, y en todo se incluye TODO: agua, energía, facilidades fronterizas, y hasta inversiones estatales en infraestructura requerida para sus yacimientos.

La justificación generalmente esgrimida para presentar como sustentable la devastación descontrolada, es la gran cantidad de capital que se requiere, el empleo que se va a generar y el "desarrollo prometido". El compromiso político reviste tal envergadura que los países han decretado la minería como asunto de "interés nacional".

(Investigación realizada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales; Acción Ecológica, de Ecuador; y FOBOMADE, de Bolivia)

Estrategias comunitarias frente al modelo de destrucción ambiental

Encuentro inter regional:

“Se llevan nuestros bienes, dejándonos sus males”

Medio centenar de representantes de comunidades y organizaciones que defienden la vida y su territorio ante la amenaza de megaproyectos desde Arica a Punta Arenas, se reunieron el 8, 9 y 10 de diciembre de 2011 en Santiago de Chile, para intercambiar experiencias y perfeccionar las respuestas frente al avance del extractivismo en sus localidades.

El encuentro “Se llevan nuestros bienes, dejándonos sus males”, organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), congregó a comunidades impactadas por proyectos energéticos, agroalimentarios, forestales y mineros, que buscan fortalecer sus resistencias locales

mediante la articulación y el aprendizaje de las diferentes respuestas que se han generado en los últimos 20 años. Esto, luego de constatar que los modos de intervención de las empresas -y el comportamiento de las autoridades- es prácticamente idéntico en todos los rubros y regiones.

Uno de los temas que surgió con fuerza en medio de la crisis hídrica, territorial, sociocultural y ambiental que sufren los territorios, fue la ruptura de las confianzas, principal capital social de las comunidades, mediante mecanismos promovidos por el Estado como leyes, decretos o la línea “técnica política” en la que operan servicios como INDAP, SERCOTEC, CORFO, PRODESAL y otros;

o también mediante las prácticas internas de las empresas, que invierten más dinero en cooptar dirigentes y financiar campañas publicitarias que las posicionen como “buen vecino”, que en mejorar las condiciones laborales, ambientales y de producción con las que nefastamente operan.

El panorama dibujado durante estos tres días, aunque desolador en términos de degradación de suelos, contaminación de aguas, división del tejido comunitario, cooptación de las autoridades y de los funcionarios públicos, sumado a una voluntad política nula para reformular el sistema político y económico que nos rige; resultó, sin embargo,



tremendamente esperanzador. Las organizaciones representantes dieron cuenta de la enorme convicción y valentía que acompaña el caminar de sus comunidades, se elaboraron diagnósticos claros y contundentes y se inició el camino hacia la configuración de una matriz estratégica que reposicione el valor de lo colectivo, que anteponga el deseo por sobre la necesidad y que cuestione la base de la egoísta y peligrosa cultura de muerte que se pretende consolidar.

Esta estrategia común acordó dar cuenta de la fuerza propositiva que anima la resistencia, diseñar mecanismos efectivos de fiscalización comunitaria a empresas y autoridades, configurar mecanismos eficientes de generación y difusión de información en medio del poderoso cerco mediático existente, denunciar la fuerte criminalización (judicial, militar, mediática y administrativa) que recae sobre quienes se oponen al falso slogan de progreso y desarrollo que sistemáticamente ha empobrecido a las comunidades locales y enriquecido a los clanes Matte, Angellini, Luksic y otras corporaciones transnacionales que operan en el territorio con extremas facilidades.

Fue relevante asimismo, la constatación que pese a las muertes, el miedo y las sendas amenazas que acompañan el cotidiano de las comunidades, hay una convicción transversal por defender el agua, la vida, la identidad y el territorio, promoviendo la soberanía, la autogestión y la autodeterminación, y fortaleciendo las experiencias de intercambio hacia el mutuo aprendizaje.



Organizaciones participantes del Encuentro:

AGE Aconcagua -Agrupación de Defensa y Conservación de la Flora y Fauna del Valle Templado de Yungay – Agrupación Mapuche Kilapan- Agrupación Medio Ambiental de Freirina-Asamblea Ciudadana Autoconvocados- Asociación de comunidades Agrícolas de la IV Región -Coalición EcuMénica por el Cuidado de la Creación - Colectivo MapuExpress – Comité Agua rural. Totoral - Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente - Comité Defensa Mehuín - Comité en Defensa del Medio Ambiente de Pichidegua - Comunidades por el Derecho a la vida. Ventanas - Consejo Defensa del Valle del Huasco - Consejo Ecológico de Melipilla - Defendamos la ciudad - Defensa

Caimanes – Departamento de Medio ambiente Federación de Estudiantes Universidad de Valparaíso – Eco Quilpué- ECOTONO Quilicura - El Triwe - Frente Defensa Ecológico Austral - Iglesia Presbiteriana del Valle del Huasco - Jornadas de Paz y Dignidad - Mesa Social de Atacama. Totoral - Movimiento Amplio Ciudadano. Antofagasta - Movimiento por la Defensa del Mar - Mujeres Territorio Lafkenche - Observatorio Ciudadano – OCAS – Pastoral Salvaguarda de la Creación de Alto del Carmen - Radio Placeres - RAJAS-Autoconvocados - RAN Serena –Coquimbo – Revolución de la Cuchara - Red Panul – Rupanko - Semillas de Agua - SOS Huasco - Unidos Contra el Asbesto - Viento Sur.

Comunicaciones OLCA, Chile.

Ciudadanía rechaza ocultamiento de información sobre OGM peligrosos para la agricultura:

Gobierno tuvo que entregar ubicación de cultivos transgénicos de Monsanto en Chile

El Servicio Agrícola y Ganadero del gobierno chileno, SAG, tuvo que entregar el listado de cultivos de maíz y soya transgénicos de Monsanto a la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile). El SAG se vio forzado a cumplir una orden del Consejo para la Transparencia para dar esa información, luego que la transnacional agroquímica, productora de la mayor cantidad de transgénicos en el país, se desistió del recurso de ilegalidad planteado contra el Consejo. Sin embargo está pendiente aun el fallo de la Corte de Apelaciones sobre el recurso presentado por 25 socios menores de Monsanto, y otros productores que también pretenden mantener el secreto.

Todo comenzó en junio de 2009 con la demanda por derecho a saber la ubicación de los cultivos transgénicos planteada por María Elena Rozas, a nombre de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida/RAP-Chile. El año 2010 el Consejo para la Transparencia, entonces encabezado por Raúl Urrutia había acogido favorablemente esa demanda en la decisión N°A59-09, ordenando al SAG entregar la información. Pero Monsanto y el resto de los productores de transgénicos apelaron de esa decisión.

María Elena Rozas declaró: "Aunque la información a la que accedimos ahora sólo se refiere a los cultivos de Monsanto de dos años atrás, es un punto de partida importante para los apicultores y

productores orgánicos y convencionales, que estarán así en condiciones de evaluar los posibles efectos de contaminación originados por los transgénicos. Al mismo tiempo, el SAG estará obligado a entregar la información sobre la ubicación de cualquier cultivo transgénico de Monsanto a quienes lo soliciten responsablemente y en forma oficial."

Por más de dos décadas, apicultores y productores agrícolas orgánicos y convencionales han estado en riesgo permanente sin que existiera información oficial disponible al respecto ni posibilidad alguna de reaccionar frente a posibles daños. También los grupos de interés de la sociedad civil organizada estaban impedidos de hacer una fiscalización ciudadana respecto de la posible contaminación de cultivos orgánicos y tradicionales. "Nuestro interés como organización, es la defensa del acceso a información relevante para el resguardo de la biodiversidad y la salud", agregó María Elena Rozas.

SAG y el Ministerio de Agricultura actúan sólo en forma reactiva. Anunciaron recientemente un sistema de georeferenciación que deja en desmedro los intereses de la agricultura orgánica, convencional y la apicultura, a pesar de que estos productores representan la mayor superficie sembrada y parte importante de las actividades agrícolas, incluyendo

la agroexportación. Los productores no transgénicos deben ahora reordenar su actividad de acuerdo a la conveniencia de un puñado de transnacionales productoras de transgénicos. El complejo sistema de información geográfica implementado por SAG ignora la realidad de miles de pequeños apicultores campesinos e indígenas dispersos por el país que son la mayoría pero que no forman parte de asociaciones gremiales y desarrollan su actividad en forma independiente. Son estos productores los que proveen a las ferias libres y al mercado interno.

Ahora es el turno de la Corte de Apelaciones respecto de la emisión del fallo que defienda la transparencia en Chile, negando las pretensiones de Erik von Baer que encabeza un negocio familiar del que es parte la senadora designada Ena Von Baer. Defienden aun el secreto 25 socios menores de Monsanto, entre los que están Massai, Hytech, GreenSeed y Curimapu Export además de la dinastía de La Designada. Ellos acompañaron originalmente a la transnacional agroquímica en su recurso de ilegalidad ante ese tribunal debido a que parte importante de las semillas utilizadas por ellos son de Monsanto y su producción de transgénicos es vendida mayormente a esta misma transnacional. El fin del secreto y el inicio del control social sobre los transgénicos permitirán enfrentar de mejor manera el objetivo del gobierno del Presidente Piñera de extender estos cultivos al mercado interno, expresado en proyectos de ley radicados en el Senado y cruzados por conflictos de interés, y millones de pesos invertidos en el lobby desatado para influir en políticas públicas.

Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile)

Integrada por:

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)

Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL)

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)



En seminario taller "El mito del beneficio Minero":

Académicos, comunidades y trabajadores mineros cuestionan la Responsabilidad Social Empresarial



En la Casa Central de la Universidad de Chile, ocupada por el movimiento estudiantil, se congregaron académicos, representantes de comunidades y dirigentes de trabajadores mineros para debatir y reflexionar en torno a la llamada Responsabilidad Social Empresarial, concepto complejo, de silencioso impacto, bajo el cual se enmascara una intervención antropológica sin precedentes en la historia republicana de Chile.

Dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores del Cobre y representantes comunitarios de Salamanca, Cuncumén, Alto del Carmen, Vallenar y Aconcagua viajaron especialmente desde sus localidades para participar del Seminario Taller "El mito del Beneficio Minero" organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Este encuentro surgió como respuesta a una embestida propagandística del sector minero sobre Responsabilidad Social Empresarial que congregó a representantes de las principales transnacionales mineras del planeta en Santiago de Chile entre los días 19 y 21 de octubre.

Con los aportes conceptuales del geógrafo y doctor en antropología Raúl Molina,

la socióloga experta en temas laborales Magdalena Echeverría, el economista y presidente de Acción AG Martín Pascual y el director de OLCA, Lucio Cuenca, las y los participantes pudieron dimensionar cómo las empresas transnacionales se han aferrado al concepto de responsabilidad social, para enmascarar la sistemática irresponsabilidad con la que operan.

Se ilustró la variedad de mecanismos empleados por las grandes empresas para practicar cooptación o promover desconfianza, división comunitaria, incertidumbre colectiva y debilitamiento del tejido social. Luego de los expositores, el seminario abrió paso a la voz de las comunidades y los trabajadores. Mauricio Ríos, presidente del Consejo de Defensa del Valle del Huasco y Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, destacaron la importancia de que quienes trabajan en la minería y los que viven en las localidades que sufren sus impactos se junten sin mirarse como enemigos, sino como parte de una comunidad impactada por un sistema económico injusto. De lo contrario, indicaron, los dardos de la resistencia terminan enfocándose mal y la lucha por la vida se hace poco eficiente.

Del mismo modo, se compartió en torno a la importancia de ir creando condiciones que se constituyan en alternativas al extractivismo y la cultura de muerte que se impone. Apostando por el desarrollo local, la restitución de los lazos y las actividades tradicionales, la promoción del amor a la tierra y los valores que ella enseña, y sobre todo, la importancia de poner al agua y la amenaza que sobre ella se cierne como el eje de la resistencia colectiva.

Finalmente, las y los participantes crearon y escribieron lienzos para poner en el frontis de la casa central de la Universidad de Chile en toma.

Comunicaciones OLCA

Analizan desertificación en Chile ante escenarios de cambio climático

Un seminario sobre "Desertificación, Degradación de la Tierra y Sequía ante escenarios de Cambio Climático en Chile", se efectuó en la CEPAL, el 29 de noviembre. En la oportunidad se presentó el proyecto CEPAL/Mecanismo Mundial sobre Valoración económica de la desertificación ante escenarios de cambio climático y un Análisis de la degradación de tierras y desertificación ante escenarios alternativos de cambio climático en Chile, preparado por la CEPAL. De acuerdo con este último estudio, más de dos tercios del país se encuentra desertificado, en niveles moderado y grave (76,04%), distribuyéndose las áreas degradadas y desertificadas en todo el país.





RIO+20
United Nations Conference
on Sustainable Development

Organizaciones de la sociedad civil entran al debate de Río+20

Una serie de reuniones preparatorias enfocadas en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, están realizando organizaciones de la sociedad civil en Chile.

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha impulsado la convocatoria a estos encuentros previos dando énfasis a la importancia de la participación del movimiento social en el debate de los temas del evento que se efectuará en junio de 2012 en Brasil.

Entre las organizaciones participantes en las discusiones se encuentran CENDA, Acción AG, Colectivo Mapuexpress, Radio del Mar, ICAL, Colectivo Vientosur, Observatorio Ciudadano, Centro Ecoceanos, Liga Ciudadana de Consumidores, RAPAL, Defendamos la Ciudad, Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Red Ambiental Norte (RAN), Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Ecosistemas, Marcha Mundial de las Mujeres-Chile, JPIC Columbanos, Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación.

Agenda Internacional 2012

12 al 17 de marzo de 2012

Foro mundial del agua.

Marsella, Francia

Se realiza cada tres años con los siguientes objetivos:

- . Aumentar la importancia del agua en la agenda política;
- . Apoyar la profundización de la discusión para lograr la solución a los asuntos globales del agua en el siglo XXI;
- . Formular propuestas concretas; y generar un compromiso político.

www.worldwaterforum6.org/fr/accueil

Para cualquier información adicional sobre Drynet contacte:

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA

Dirección: Alonso Ovalle 1618, Of. A, Santiago de Chile

Teléfono: +56 2 6990082

email: observatorio@olca.cl

o visite: www.olca.cl

www.dry-net.org

Décima Conferencia de las Partes de la Convención de Lucha contra la Desertificación

La décima reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNUCLD COP 10) se celebró del 10 al 21 de octubre de 2011, en Changwon, República de Corea. En paralelo a la COP se reunió además el Comité de Ciencia y Tecnología (CST 10) y el Comité de Examen de

la Aplicación de la Convención (CRIC 10). En esta serie de eventos se inscribieron aproximadamente 6.300 participantes que debatieron y adoptaron 40 decisiones. Además de la COP, el CRIC y el CST, se llevaron a cabo dos diálogos abiertos con las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

